

Señores

**ALCALDÍA DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA**

**SECRETARIO DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL DE MEDELLÍN**

E. S. D.

**Ref.: PROCESO ADMINISTRATIVO - TOMA DE LOS NEGOCIOS, BIENES Y HABERES EN LA MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS NATURALES COMERCIANTES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO.**

**ACTO ADMINISTRATIVO:** RESOLUCIÓN NÚMERO 202250096131 DE 01/09/2022

**ASUNTO:** IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE RECURSO DE REPOSICIÓN.

**JORGE WILLSSON PATIÑO TORO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Número 71.701.370, actuando en nombre propio, a Usted respetuosamente me dirijo con el objeto de impugnar la decisión contenida en el acto administrativo **Resolución Número 202250096131** expedida el **01/09/2022**, por medio de la cual la secretaría ut supra, resolvió “..Tomar posesión inmediata de los Negocios, Bienes y Haberes en la modalidad de Liquidación Forzosa Administrativa de las personas naturales, comerciantes y coadyuvantes, de conformidad el Artículo 9 de la Ley 66 de 1968, PERSONAS NATURALES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 34.990.458, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución, por el término de veinticuatro (24) meses prorrogables, quienes en adelante se denominarán como personas naturales, comerciantes y coadyuvantes JORGE WILLSSON PATIÑO TORO EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA...” entre otras determinaciones, lo cual se hace a través del **recurso de reposición**, a efectos de que la mentada orden sea revocada en su totalidad.

### **1. DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO**

Corresponde a la Resolución número 202250096131 expedida en la data 01/09/2022, por medio de la cual se dispuso: “LA TOMA DE LOS NEGOCIOS, BIENES Y HABERES EN LA MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS NATURALES COMERCIANTES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 34.990.458”, y que luego de la exposición de las consideraciones legales y de facto, la administración resolvió -entre otros-:

*“...ARTÍCULO 1. Tomar posesión inmediata de los Negocios, Bienes y Haberes en la modalidad de Liquidación Forzosa Administrativa de las personas naturales, comerciantes y coadyuvantes, de conformidad el Artículo 9 de la Ley 66 de 1968, PERSONAS NATURALES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 34.990.458, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución, por el término de veinticuatro (24) meses prorrogables, quienes en adelante se denominarán como personas naturales, comerciantes y coadyuvantes JORGE WILLSSON PATIÑO TORO EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA.*

*PARÁGRAFO: La determinación de la modalidad de la Toma de Posesión en la modalidad de Liquidación Forzosa Administrativa, es conforme a lo previsto por el Artículo 9.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010...”*

*ARTÍCULO 2: Disponer las siguientes medidas según lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 66 de 1968 y el Artículo 9.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010,..*

*(...)*

*ARTÍCULO 3: De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 2 del Artículo 9.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, se separa de la administración de sus negocios, bienes y haberes de las PERSONAS NATURALES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 34.990.458, en concordancia con el Artículo 13 de la Ley 66 de 1968, la cual se hará durante la vigencia de la Toma de Posesión en la modalidad de Liquidación Forzosa Administrativa.*

*(...)*

*ARTÍCULO 6: Disponer de la inmediata ocupación de los libros de contabilidad de cuentas, papeles y demás documentos de propiedad de las PERSONAS NATURALES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 34.990.458, y la práctica de allanamientos en el caso de ser necesario (Art. 14 Ley 66 de 1968), por parte del Agente Liquidador, para lo cual recibirá acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería Municipal del Municipio de Medellín, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín, Inspecciones de Policía y de Control Urbano y demás dependencias de la administración municipal que se requieran para ejecutar la medida o dependencias de otros municipios, los cuales actuarán como articulaciones, siendo causal de mala conducta la demora, retraso o dilación sin justificación legal.*

*ARTÍCULO 7: Decretar el Embargo y Secuestro de todos y cada uno de los bienes muebles e inmuebles de propiedad las PERSONAS NATURALES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.34.990.458, o de aquellos que actualmente tengan o posean a cualquier título que se hayan descrito en la presente resolución, en cualquier lugar del país donde se encuentren ubicados estos, al igual los que en lo sucesivo el Agente Liquidador HÉCTOR ALIRIO PELÁEZ GÓMEZ, identificado*

*con cédula de ciudadanía No. 15.429.390 enuncie como de propiedad o posesión o a cualquier título de las personas naturales intervenidas, y que será comunicada a través de Oficio por el Agente Liquidador a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o la entidad correspondiente, los cuales actuarán como articulaciones, siendo causal de mala conducta la demora sin motivo legal.*

*ARTÍCULO 8: Se ordena el embargo y secuestro de los dineros, títulos y bienes que se encuentren a nombre de las personas naturales comerciantes intervenidas JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 34.990.458., en las entidades afiliadas al sistema financiero, bancario nacional y entidades captadoras de dinero al público a nivel nacional. Así como juzgados y entidades administrativas. Se comunicará a través de Oficio a la entidad respectiva por el Agente Liquidador.*

*ARTÍCULO 9: Ordenar la suspensión en el estado en que se encuentren los procesos ejecutivos que obren en contra de las personas naturales intervenidas, y el levantamiento de las medidas cautelares, los Jueces de la Republica que estén conociendo de ellos, procederán de oficio y comunicaran a la Secretaria de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, y al demandante de la suspensión. Así mismo y a solicitud del demandante decretaran el desglose del título ejecutivo y de los documentos de los procesos, a fin de que este pueda hacerlo valer en el proceso de liquidación.*

## **2. OPORTUNIDAD**

Conforme lo prevé el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, con el respeto debido, me permito presentar la sustentación respectiva del recurso de reposición estando dentro del término legal para ello, toda vez que el acto administrativo fui notificado.

## **3. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD Y SUSTENTACIÓN**

Estando señaladas textualmente las causales respecto las cuales se ordenó “LA TOMA DE LOS NEGOCIOS, BIENES Y HABERES EN LA MODALIDAD DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS NATURALES COMERCIANTES JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 71.701.370 Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 34.990.458”, me permito exponer los motivos por los cuales nos apartamos respetuosamente de las causales invocadas, por las siguientes razones fácticas y en derecho:

**3.1.** Se dijo en la decisión impugnada que, el señor JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 71.701.370, se encuentra inmerso en las causales que seguidamente se enlistan, señaladas en la Ley 66 de 1968:

1. *Cuando hayan suspendido el pago de sus obligaciones.*
2. *Cuando hayan rehusado la exigencia que se les haga en debida forma de someter sus cuentas y sus negocios a la inspección del Superintendente Bancario.*
3. *Cuando persistan en descuidar o rehusar el cumplimiento de las órdenes debidamente expedidas por el Superintendente Bancario.*
4. *Cuando persistan en violar alguna norma de sus estatutos o de la ley, en especial la relativa a la obligación de llevar la contabilidad de sus negocios.*
5. *Cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o insegura.*
6. *Cuando su patrimonio, si se trata de personal natural, o su capital y reservas en las personas jurídicas, sufra grave quebranto que ponga en peligro la oportuna atención de sus obligaciones.”*

Sea lo primero manifestar que el ciudadano contra quien ahora se dicta la orden administrativa a través de un acto, no ha ejercido las actuaciones señaladas en la Resolución acusada, en virtud a que no es la persona de JORGE WILLSSON PATIÑO TORO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 71.701.370, quien a su nombre celebró contratos, solcitó actuaciones ante la alcaldía de Medellín, suscribió contratos, entre otros; pues lo que en el proceso se evidencia y resaltan en cada línea, corresponde a las actuaciones o actos ejercidos **A NOMBRE DE UNA PERSONA JURIDICA**, no a nombre propio, es por ello que el mentado ciudadano no es objeto de la Ley 66 de 1968, en tanto él, a un nombre, no ha ejercido ni desarrollado la actividad de enajenación que describe la ley en cita, se itera, tales actos han sido acreditados en este proceso administrativo, es respecto de las sociedades intervenidas desde la data de 2020, inclusive mucho antes, cuanto en sede de la Supersociedades se adelantaron actuaciones en ese mismo sentido.

La norma *ibid.*, dispone **cuándo se entiende desarrollada las** actividades de enajenación de inmuebles que señala la misma disposición normativa, regulando dicha hipótesis factual legal que, esta se configura **cuando las unidades habitacionales proyectadas o autorizadas por las autoridades metropolitanas, distritales o municipales sean cinco (5) o más.**

Ahora véase que todas la unidades de viviendas fueron autorizadas a las sociedades, de quien él fue su presentante legal; entonces no puede aplicársele una norma a un ciudadano que no es objeto de ella, pues esta disposición solo es aplicable a personas calificadas, es decir, que reúna la calidad que la norma señala y que en efecto se desarrollen la actividad de enajenación de inmuebles.

Recuérdese que todo ciudadano goza de la garantía del debido proceso, y al desarrollo de un juicio justo, aplicando las normas legales correspondientes éste.

La administración no puede confundir la calidad de persona natural del señor JORGE

WILLSSON PATIÑO TORO, con la calidad de representante legal de **personas jurídicas** que si desarrollan el objeto de la Ley 66 de 1968, pues como descansa en el dossier administrativo, éste ciudadano fue facultado por una persona jurídica, debidamente constituida, para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos relacionados con su objeto social.

Ese esa la razón por la que las causales atribuidas al ciudadano JORGE WILLSSON PATIÑO TORO, se caen de su propio peso, por las siguientes razones:

La primera causal -verbigracia, atribuida dispone: **“1. Cuando hayan suspendido el pago de sus obligaciones.”**

Para encuadrar típicamente la administración esta causal, hizo **solo una mención** a la existencia de proceso judiciales donde figura el señor JORGE WILLSSON PATIÑO TORO como demandado, din determinarse si en los procesos la calidad que se aduce corresponde como representante legal o como persona natural en su nombre.

El debido proceso y un juicio justo debe de determinar claramente estas situaciones, y no solamente hacer mención si clarificar las pretensiones de cada proceso y si efectivamente figura en lista de demandado o si el sistema judicial le asigna esa condición en virtud de ser el representante legal. Esa situación, para poder servir de base a esa causal ha debido se explicita, y no solo una mención. Igual ocurre con los demás procesos enlistados.

Ahora bien, en lo que atañe a las denuncias, olvida la administración que **toda persona goza constitucionalmente de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, y que ésta solamente es desvirtuada por parte del Estado, a través de sus funcionarios competentes para adelantar persecución penal, presunción que solo se pierde **cuando efectivamente el Estado ha logrado DESVIRTUARLA**, y ello se logra a través de la providencia dictada **POR UN JUEZ PENAL DE LA REPUBLICA, Y SOLO DESPUÉS DE HABERSE SURTIDO UN JUICIO** donde el procesado ha contado con todas las garantías para defenderse de las acusaciones del Estado.

**TAL PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SE PIERDE** cuando se dicta **UNA SENTENCIA Y ESTA HA QUEDADO EJECUTORIADA**, PORQUE AÚN SE DICTE UNA SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA, **AÚN SE SIGUE GOZANDO DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA DOBLE INSTANCIA.**

Es por ello que las consideraciones relacionadas con las denuncias no deben ventilarse en disfavor de un ciudadano, toda vez que la ley lo contempla como un **mero acto de comunicación** de una **PRESUNTA comisión de un punible**, es decir, ni siquiera se ha llegado a un grado de **PROBABILIDAD DE LA COMISIÓN DE UNA CONDUCTA PUNIBLE**.

El buen nombre es otro derecho constitucional que se ve afectado por la administración al hacer uso de denuncias para sustentar este acto administrativo. Así las cosas, no estamos ante un debido proceso, pues le corresponde a la administración probar que las causales se configuraron y señalar las pruebas que obran para tal menester.

En ese orden de razonamiento, ha de procesarse que, si lo actuado por parte del señor JORGE WILLSSON PATIÑO TORO, ha sido en nombre y representación de dichas sociedades, intervenidas y bajo control estatal desde el año 2018, surge el interrogante ¿de donde surge las obligaciones de que trata la causal primera, que se ha venido analizando amañera de ejemplo?, si las probadas en el dossier corresponden a las personas jurídicas que representó y no a él como persona natural. Qué obligación se le transmite a JORGE WILLSSON PATIÑO TORO por el solo hecho de ser representante legal de una persona jurídica, ahora intervenida.

Correspondía a la administración determinar con claridad cuales eran las obligaciones a que hacía referencia y no enlistar una causal de forma general, bajo supuestos de calidad de demandado y denunciado, sin olvidar que, estas han debido emanar de conformidad al desarrollo del objeto de la Ley 66 de 1968.

Véase que también se dice que, dentro de esos procesos judiciales existen cobros coactivos por parte de la DIAN, municipio de Medellín, sin embargo, cual es la actuación de dichos entes, si en verdad se trata de actos contra el señor JORGE WILLSSON PATIÑO TORO, o por su calidad de representante legal, o esas actuaciones son en disfavor de las personas jurídicas a las cuales representó.

Se vuelve a la misma falta de claridad, y en razón a que esta decisión no está soportada legalmente, por construirse bajo una ley no aplicable a este ciudadano, es decir, sin observancia de la legalidad, Maxime si se trata de una norma cuyas decisiones no dejan de ejecutarse, por lo cual todas las actuaciones cautelares se han practicado o por lo menos comunicado a las entidades destinatarias del cumplimiento de la orden, de una decisión administrativa carente de legalidad y asidero factual, en cuanto al ciudadano JORGE WILLSSON PATIÑO TORO corresponde.

En lo que atañe al proyecto Alabama y lo hallazgos encontrados desde el año **2021**, surgen evidentes faltas probatorias que, ha debido la administración subsanarlas, pues se dice en el acto administrativo ahora acusado que, la responsable correspondía a ser una señora a quien identificaron como GERALDIN FERRER CACIQUE, Y VÉASE QUE EN DESARROLLO DE DICHA DILIGENCIA, ELLA LE OTORGA PODER A UN PROFESIONAL DEL DERECHO PARA QUE LA REPRESENTA, luego entonces, donde está el nexo causal entre los actos del señor JORGE WILLSSON PATIÑO TORO en esta situación, sin olvidar que desde el año 2020 ya no fungía como representante legal.

De la ciudadana Ferrer que dijo ser la dueña, nada se menciona en el acto administrativo, y por qué si se identificaron desde el año 2021 esta situación, la administración no actuó como le correspondía en ejercicio de sus funciones de **VIGILANCIA y CONTROL**.

REALMENTE DE ESTE ASPECTO Y OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, en este asunto ahora recurrido, nada se dice, nada se evidencia de cuales fueron las acciones que desplegó la administración para que ésta se corrigiera, y no imponer ahora una sanción tan drástica que daña hasta el buen nombre de personas.

Se dijo también en el acto administrativo que, *“...las calidades de comerciantes en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 19 le son aplicables a los señores JORGE WILLSSON PATIÑO TORO Y MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO, el primero quien omitió dar cumplimiento a la inscripción en el registro mercantil, pese a estar obligado a inscribirse como comerciante, persona natural, en términos del numeral primero del Artículo 28 del Código de Comercio,...”*; lo cual no se entiende a estas instancias y luego de haberse dictado la toma de posesión y haberlo separado de sus funciones de representante legal, solo para proceder ahora bajo el amparo de una ley no aplicable y sin competencias legales, ¿acaso esto no debió de objeto de control desde el año 2018? Desde cuando se estaba bajo sospecha las sociedades ahora intervenidas.

No le asiste razón a la administración en este aspecto, pues lo que de vislumbra es una omisión al deber que debió cumplirse en ejercicio del control que la ley le asiste, pero respecto de las sociedades.

Ahora bien, constituye esa situación factual superada, causal para que se soporte el acto administrativo recurrido. No la ley es clara, y es dentro del marco del desarrollo de enajenación de proyecto autorizados a personas que se dediquen a esas actividades, y no a quienes las presentan, véase que la ley dispone los EFECTOS JURÍDICOS DE LA

REPRESENTACIÓN, cuando señala que los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con éste. Además, se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa, y quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, **deberá probarlo**.

Ahora bien, el contrato de dación en pago suscrito por MARTHA CECILIA HOLGUIN CASTAÑO con una de las sociedades, goza de la misma presunción de buena fe, además se habla en la resolución acusada de “perjuicios inversionistas”, no obstante, ellos nunca fueron puestos de presente, ni los perjuicios que en todo proceso debe de probarse y acreditarse, y quienes fueron los inversionistas del proyecto que fueron afectado; cuando la realidad contractual demuestra otra situación.

Este es otra más de las consideraciones que no están probadas en el dosier administrativo, y el decir que no está probada la existencia de la obligación, es tanto como justificar esa omisión, con las razones que llevaron a las sociedades a su intervención, pues reiteradamente se dijo que esta sociedades no llevaban contabilidad, y este aspecto no puede ser cargado en disfavor de una persona ajena en el año 2018, que fue la data en que se celebró el contrato, al ejercicio de las actividades de la sociedad deudora.

Este contrato se celebró por JORGE WILLSSON PATIÑO TORO en ejercicio de la representación legal que ejerció de una persona jurídica que si se dedicaba en su razón social al desarrollar actividades de enajenación de viviendas, y no a nombre propio, ni menos en calidad de comerciante.

Ahora bien, de que pruebas dispone la administración para referir que los bienes de los que ahora toma posesión pertenecen al patrimonio de las sociedades intervenidas, sin analizar ni efectuar un razonado estudio de títulos y los traslaticios de dominio;:: ciertamente de ninguna, pues nada se dijo respecto de cada una de las propiedades que supone son de las sociedades intervenidas, no hay prueba de que cada título haya sido analizado legalmente, de acuerdo al giro propio de lo negocios que se efectuaron y terminaron en cabeza de los señores afectados con la toma de posesión, eso no es un debido proceso.

Lo que se evidencia es una decisión acelerada, violatoria de muchos derechos constitucionales, hasta del derecho fundamental y constitucional a la propiedad, y generando desconfianza en el conglomerado frente a la recta impartición de justicia, usando una norma sin competencia para tales efectos, para tales efectos, y din demostrar



las causales endilgadas; pues todo lo alegado gira en torno a las sociedad y personas jurídicas intervenidas.

Es por ello, que ha debido dejar que efectivamente se realizada una legitima defensa antes de dictar una decisión absoluta, pues véase que esta no deja de ejecutarse, por muchos recursos que se interpongan, y que solo es procedente uno horizontal, lo que claramente, más para decir sobre el debido proceso.

Atentamente.

**JORGE WILLSSON PATIÑO TORO**

C.C. No. 71.701.370